



Columna



Nicolás Pacheco, coach de modelo de negocios y expansión

Licencias médicas y viajes VIP

El reciente informe de la Contraloría General de la República dejó al descubierto una vergonzosa postal del Estado chileno: más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica. No hablamos de casos aislados ni errores administrativos. Es un escándalo masivo que alcanzó incluso a instituciones como La Moneda, con 14 ministerios, 24 subsecretarías, municipios, gobiernos regionales, y sí, también a la propia Contraloría.

Pero este fenómeno no es ajeno al sur. Nuestra comuna aparece como el quinto organismo público con más licencias médicas asociadas a viajes al extranjero. El municipio ya identificó a 341 funcionarios que hicieron mal uso del sistema. Hay casos en los que una persona obtuvo una licencia médica y al día siguiente ya estaba cruzando un paso fronterizo. La situación no sólo es indignante, es grotesca y casi delictual.

El alcalde anunció el inicio de sumarios y acciones para recuperar los dineros, pero esta es apenas una reacción frente a un sistema que permite este tipo de abusos. Porque el problema de fondo no es sólo quien se fue a la playa con reposo médico, sino que tenemos un diseño institucional que invita al abuso. En el sector público, las licencias no tienen carencias ni topes. Los funcionarios reciben su sueldo completo, aunque estén 30 días fuera, y nadie se pre-

gunta si realmente están enfermos.

El ausentismo promedio en el Estado es de 31,8 días por persona al año, el doble que en el sector privado. Y el gasto en licencias médicas llegó a US\$ 350 millones sólo en 2024. ¿Cuántas escuelas, postas rurales o programas sociales se podrían haber financiado con ese dinero? Esto no es contra los trabajadores públicos. La gran mayoría cumple su función con compromiso. Pero cuando el sistema permite que una minoría abuse y no pasa nada, la desconfianza se generaliza y el servicio público se desprestigia.

Necesitamos una reforma profunda: igualar las condiciones entre trabajadores públicos y privados, modernizar la fiscalización y terminar con este estatuto administrativo que impide tomar decisiones rápidas y justas. Si no lo hacemos, este será sólo el primero de muchos informes vergonzosos por venir.

Puerto Montt hoy es noticia, pero no está sola, esto ocurre en todo el país, demostrando que la enfermedad no está en los certificados o licencias médicas, está en un Estado que se ha quedado sin anticuerpos frente al abuso, está en los médicos que se han prestado dolosamente para este fraude y por sobre todo en los 25 mil funcionarios públicos que nos roban viajando al extranjero con nuestra propia plata.